

A photograph of a chessboard with a wooden king and a grey rook on a black and white checkered surface. The background is a soft, out-of-focus light grey.

6^{to}

Congreso
Latinoamericano de
CIENCIA POLÍTICA

12, 13 y 14 de junio de 2012
FLACSO Sede Ecuador



Entre la soberanía y la dependencia: la política externa boliviana bajo el gobierno de Evo Morales

Aldo Duran Gil

Universidad Federal de Uberlândia (UFU, Brasil)
adurang@yahoo.com

Área Temática:

Política comparada

Procesos políticos recientes en América Latina

Trabajo preparado para su presentación en el *VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política*, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).
Quito, 12 al 14 de junio de 2012

Entre la soberanía y la dependencia: la política externa boliviana bajo el gobierno de Evo Morales¹

Aldo Duran Gil²

Introducción

La elección de Morales y la subida del partido Movimiento al Socialismo (MAS) al poder gubernamental (2006) desencadenó gran desconfianza y cautela por parte de las clases dominantes del país, del capital extranjero, de los Estados Unidos y de los países vecinos más influyentes (Brasil, Argentina, Chile) debido al temor de que Bolivia se convierta en una nueva Venezuela. En ese contexto cabe preguntar sobre el carácter de la política externa adoptada por el nuevo gobierno en consideración, si hubo reorientación de tal política y cuál la naturaleza de las relaciones entre los principales actores políticos internacionales en América Latina. Este trabajo pretende analizar la política externa del gobierno de Morales caracterizando sus principales aspectos, tales como su reorientación o redefinición y las relaciones con los Estados Unidos, Brasil y Chile. Partimos de la hipótesis según la cual hubo una reorientación de la política externa basada, por un lado, en el multilateralismo, la reciprocidad y el rescate de la soberanía nacional; y por otro, en el contenido de tal política, que reveló amplia influencia del pacto o concertación conflictiva, en el ámbito interno, entre el gobierno de Morales y las fuerzas de oposición autonomistas en el contexto del proceso de cambio llevado a cabo por el primero.

1. Reorientación de la política externa boliviana

Durante el primer año de gobierno, la élite regional autonomista, el capital extranjero, bien como el gobierno estadounidense y algunos países vecinos como Brasil, Argentina y Chile, pasaron a entender el conflictuoso proceso de cambio pactado entre la oposición autonomista y el gobierno. Sería en ese contexto que se debe entender los conflictos entre el gobierno boliviano y el Brasil en relación al fornecimento de gas. Evidentemente, la acción de un país en la esfera regional está condicionada o sobre-determinada por la acción de otros que tienen mayor peso económico y político en la jerarquía de la estructura del sistema capitalista en el ámbito internacional. A pesar de que la política interna de un país no determine unilateralmente la política externa (o viceversa), no significa que ésta no sea influenciada por aquella. En suma, las políticas interna y externa tienen lógica, dinámica y complejidad propias, pero se implican mutuamente.

En ese sentido, la presión constante de las clases dominantes nativas de la región llamada “media luna”³ contra el programa político del MAS y la política estatal

¹ Este trabajo es una versión mejorada y actualizada del ítem “Aspectos da política externa” del texto “Bolívia e Equador no contexto atual” -Duran Gil, Aldo. (2008a)- publicado en Ayerbe, L. F. (org.). (2008). *Novas lideranças políticas e alternativas de governo na América do Sul*, São Paulo: Editora UNESP/Programa San Tiago Dantas de Pós-Graduação em Relações Internacionais.

² Sociólogo y cientista político, profesor Adjunto de la Universidad Federal de Uberlândia, Brasil, coordinador del Grupo de Pesquisa Estado y Capitalismo en América Latina. Email: adurang@yahoo.com

³ El término o metáfora “media luna” pasó a designar la gran región geográfica del sector Este del país, compuesta por los departamentos (ubicados de norte a sur) con la más grande área cultivable del país y donde se encuentra concentrada la gran propiedad fundiaria: Pando, Beni, Santa Cruz, parte de Chuquisaca e Tarija. En el mapa boliviano ellos forman un diseño semejante a una “media luna”, abarcando prácticamente más del 50% del territorio nacional. Esa metáfora es nueva y surgió en el

implementada por el gobierno se ejercen conjuntamente con la presión del capital extranjero monopolista, que aparece oculto y a la sombra de la acción de la “oligarquía regional”⁴. Eso se debe al hecho de que el capital extranjero delegó su función política y ideológica a esa oligarquía para que lo represente políticamente, apareciendo el conflicto entre clases sociales como si fuese un conflicto entre regiones en el país. Com efecto, existe un juego de múltiples presiones políticas para bloquear, neutralizar o modificar la acción del gobierno de Morales, haciéndolo retroceder en el proceso de implementación de su propuesta de transformación del país. Ese juego de presiones se ajustó también a la política del pacto democrático viabilizada por el gobierno en relación a la política externa⁵.

Defendemos la tesis de la *concertación* o *pacto democrático* conflictivo entre el actual gobierno y la oposición autonomista dirigido por el primero para llevar a cabo el proceso sócio-político de cambio del país⁶. El pacto se revela por lo menos en tres niveles importantes: 1) en el proceso de la confección de la nueva Carta Magna en el contexto de la Asamblea Constituyente: importantes concesiones políticas a la minoría (oposición autonomista) con otorga de poder de veto y limitación de la democracia participativa dinamizada por los movimientos populares; 2) en el proceso de nacionalización del gas y petróleo: nacionalización blanca que deja intacta la estructura de producción controlada por el gran capital petrolero monopolista internacional a través de contratos leoninos, y apenas recuperación de la propiedad jurídica estatal de las minas de gas y petróleo (suelo y subsuelo), reforzada con el aumento relativo de impuestos, pero aún bajísimos, caracterizando un Estado rentista (que se conforma solamente con la extracción de impuestos) y no un Estado productor; 3) en el proceso de la reforma agraria: reforma caracterizada como redistributivista, con repartición de tierras fiscales lejos de la frontera agrícola pero dejando intacto el medio y gran latifundio, principalmente de la “media luna”, que fue barnizado por la “función económica- social” -mismo que el último referendo nacional tenga definido el mínimo de 5 mil hectáreas por propietario, pues la gran propiedad fundiaria quedó preservada por la nueva Constitución.

Conforme sostuvo García Linera, la nueva élite (caracterizada como indígena-mestiza) que subió al poder en el gobierno de Morales empeñase en *compartir* el poder con la élite tradicional, más específicamente con los sectores autonomistas de la región de Santa Cruz (que comandan la “media luna”). Así, estaría ocurriendo en Bolivia –según García- un proceso de ampliación de las élites y que al mismo tiempo se reconoce el poder político de la “oligarquía” autonomista debido a su papel importante en el desarrollo capitalista de la región y su impacto en el resto del país. De ahí que se trata de un proceso de cambio o *reforma pactuada* entre la nueva élite y la antigua⁷.

contexto de lucha político-ideológica de la gran propiedad fundiaria contra el proyecto de reforma agraria del gobierno de Morales. Ver Duran Gil, Aldo (2011). “A política agraria boliviana sob o governo Morales”, en http://www.sep.org.br/artigo/6_congresso/2423_403e6b4413bfe22d9d36e3fd43972b65.pdf.

⁴ Denominamos “oligarquía regional” a la gran propiedad fundiaria, la burguesía agro-exportadora y la burguesía agro-industrial. Ese conjunto de fracciones de clase dominante na esfera regional es comandada política e ideologicamente por la “oligarquía cruceña”, oriunda del departamento de Santa Cruz. Debido a la falta de espacio aqui utilizamos provisoriamente esos conceptos. Sobre esa problemática ver Duran Gil, Aldo (2003). *Estado militar e instabilidade política na Bolívia (1971-1978)* en <http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000311497>. Cf. capítulo II, principalmente item 2.3, “Caracterização das classes dominantes na Bolívia” e item 2.4, “Balanço global: uma interpretação alternativa sobre as classes dominantes na Bolívia”.

⁵ Ver Duran Gil, Aldo (2008a), op. cit., pp. 39-81.

⁶ Ibidem, pp. 56-60.

⁷ García, Alvaro (2007). “Las élites comparten el poder”, em www.econoticiasbolivia.com. Ver también García, Alvaro (2006). “El evismo: lo nacionalpopular en acción”, en *OSAL-Observatorio Social de*

Volvamos a nuestro tema. Es en ese juego de múltiples presiones que también se debe entender la acción de los países más poderosos e influyentes en la región. En el proceso de nacionalización del gas y el petróleo el conflicto entre el gobierno de Morales y las transnacionales petroleras apareció como si fuese un conflicto entre países (España, que defendió a la REPSOL YPF; Brasil, a la PETROBRAS etc.). Debido a diversos factores, el actor más poderoso e influyente (Estados Unidos) no supo lidiar con el gobierno boliviano, perdiendo su tradicional influencia y control en Bolivia. Con todo, intentó –y aún intenta- recuperarlos a cualquier precio reactivando su intervención polivalente: la principal acción que comandaría esa intervención sería la busca de apoyo económico y político a la oligarquía regional, apostando en la estrategia de lucha autonomista y separatista.

Por otro lado, los Estados Unidos parecen haber delegado su intervención al país más poderoso e influyente de América del Sur: el Brasil -a pesar de este actor tener intereses propios, un tanto diferente a los defendidos por la potencia hemisférica, pero que se aproxima de una postura en relación a los países vecinos que Marini denominó “sub imperialismo”⁸. Los acuerdos comerciales entre los gobiernos de Lula y de Morales en el marco de la integración regional tendrían, por lo menos, un doble sentido. Por un lado, el apoyo del Brasil al proceso democrático llevado a cabo por el gobierno de Morales para garantizar la estabilidad política del país, tentado alejar el tradicional golpe de Estado (una permanente amenaza), lo que se compatibilizaría con la política de la *Cláusula Democrática* del MERCOSUR e impediría el desequilibrio geopolítico del Cono Sur (y en la peor de las hipótesis, una posible balcanización del país)⁹. Por otro, la defensa de los intereses económicos brasileños: la permanencia de la PETROBRAS y el fornecimiento ininterrumpido de gas con “precio de banana”, bien como la expansión de empresas brasileñas en Bolivia.

Por su lado, Argentina y Chile también ofrecieron su apoyo político formal al gobierno boliviano, pero defendiendo sus intereses propios: exigencia de fornecimiento de gas barato en caso del primero y distensión de las relaciones diplomáticas en relación al problema del litoral en el caso del segundo. Con efecto, los intereses fundamentales

América Latina, n°. 19, Júlio, CLACSO, Buenos Aires. Ese pacto político fue ampliamente justificado y legitimado por García a lo largo de su libro reciente. Ver García, Alvaro (2010). *A potência plebeia*. São Paulo: Boitempo Editorial. El libro fue primeramente publicado en Buenos Aires por la editora Prometeu Libros en 2008, bajo el título *La potencia plebeya*.

⁸ Ver Marini, R. Mauro (1991). *Dialéctica de la dependência*, México: Ediciones Era, 11ª reimpression. El estudio del tema sub imperialismo parece estar en ascensión en la esfera de las relaciones internacionales en América Latina, por lo menos en Brasil. A título indicativo citemos apenas el siguiente trabajo (master): Seibel, Mathias (2007). *O subimperialismo brasileiro revisitado: a política de integração regional do governo Lula (2003-2007)*, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Porto Alegre (RG).

⁹ Existirían fuertes indicios de que una de las “cartas en la manga” del juego polivalente de los Estados Unidos en Bolivia sería la balcanización, al estilo de la ex Yugoslavia, y que P. Goldberg, nuevo embajador estadounidense habría sido escogido para concretizar esa política. Inclusive, ese diplomático sería el responsable por la aplicación de esa estrategia en aquel extinto país cuando era embajador. Por otro lado, en la defensa de esa estrategia estarían involucrados integrantes de la mafia cubana, como Negroponte (que ahora es funcionario estadounidense), integrantes de las oligarquías regionales autonomistas de Santa Cruz (Bolivia), Guayaquil (Ecuador) y del estado de Zulia (Venezuela), los cuales habrían creado una organización internacional (CONFILAR - Confederación Internacional por la Libertad y Autonomía Regional) con apoyo abierto de los Estados Unidos para desestabilizar los gobiernos Morales, Correa y Chávez. Ver Dieterich, H. (2006). “Bolivia: hoy, la derecha va al poder”, en <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=43155>. Recordemos que Goldberg y otro funcionario estadounidense fueron expulsos del país acusados de organizar la oposición autonomista y de conspiración abierta contra el gobierno boliviano para derribarlo en las jornadas sangrientas del 11 de Septiembre de 2008 (fecha con curiosa coincidencia).

que estarían por detrás del apoyo al actual gobierno boliviano por parte de los países vecinos más influyentes serían, por lo menos, los siguientes: 1) mantener cierta estabilidad política en Bolivia y garantizar la explotación de sus principales recursos de exportación, manteniendo la dependencia y el atraso crónico del país; 2) impedir que el país se desintegre (balcanización), pues de lo contrario amenazaría profundamente la seguridad y el equilibrio geopolítico regional; y 3) impedir que el gobierno de Morales se transforme en una nueva Venezuela.

Frente a ese cuadro, pasemos a identificar los principales aspectos de la política externa practicada por el gobierno de Morales. Si la lógica de la *concertación* aparece como un denominador común en la política interna con fuerte recuperación relativa de la autoridad estatal en relación a los sectores económicamente poderosos (gran latifundio, sector agroexportador, gran capital monopolista extranjero que opera en los sectores petróleo, mineración, bancos, etc.), la política externa adopta una combinación de trazos del multilateralismo, reciprocidad y negociación compartidas reorientados por la lógica de la recuperación de la soberanía del país. Es sabido que los regímenes populistas tradicionales (1930-1964) en América Latina se empeñaron en recuperar la soberanía nacional, una característica fundamental de la implementación de la política económica y social con fuerte intervención del Estado en los ámbitos interno y externo¹⁰. En el ámbito interno, amplia base social de apoyo al régimen con la integración de las masas trabajadoras sobre todo urbanas, con otorga de una legislación laboral favorable a la regulamentación de la relación capital-trabajo, bien como la ejecución de un tipo de industrialización nacional dependiente comandada por el Estado en la ausencia de una burguesía industrial nativa –o sea, “una política estatal de integración/control de las clases trabajadoras, con un intervencionismo socio-económico al servicio de un proyecto de desarrollo capitalista nacional”¹¹. En el ámbito externo, utilización de la prerrogativa “soberanía nacional” como instrumento de negociación o presión a través de la práctica de un tipo de multilateralismo y reciprocidad en las negociaciones frente a los países capitalistas centrales¹².

Podemos afirmar que el gobierno de Morales seguiría más o menos la misma lógica en los dos ámbitos indicados. Con todo, éste no puede ser caracterizado como populista tradicional, aunque aspectos de su política ejecutada tengan presentado trazos neopopulistas: ampliación de la base social de apoyo con la lógica integración/control de los trabajadores campesinos e indígenas combinada con un intervencionismo socio-económico al servicio de un proyecto *sui generis* de neodesarrollo capitalista nacional y no “socialista”: el “capitalismo andino-amazónico”. Eso es particularmente notorio en el discurso del liderazgo gubernamental y que expresa el sentido de un aspecto importante del programa del partido de gobierno: el rescate de la soberanía, conforme el propio nombre del partido lo indica: *Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos* (MAS-IPSP). De un lado, la integración de las grandes masas populares campesinas e indígenas en el sistema político, viabilizando una revolución democrática y jurídica, con justicia social y equidad –en las palabras de Morales, una “revolución democrática cultural” o “revolución democrática descolonizadora” y la

¹⁰ Ver Duran Gil, Aldo (2008b). “Bolivia: duas revoluções nacionalistas?”, en *Perspectivas*, Revista de Ciências Sociais, Vol. 33, pp. 183-185. Disponible también en <http://seer.fclar.unesp.br/perspectivas/article/view/1457>.

¹¹ Saes, Décio (2001). *República do Capital*, São Paulo: Boitempo Editorial, p. 78. Nos alejamos de la caracterización corriente y predominante sobre el populismo basada en la relación “líder-masa” y en su expresión clientelista, entendidas como pre-capitalista y pre-moderna.

¹² A título indicativo mencionemos apenas el trabajo del periodista Bacarreza, F. Roque (1995), que analiza la política externa en el régimen populista boliviano (1952-64): *Los Años del Condor. Sesenta crónicas del triunfo revolucionario boliviano en plena Guerra Fría*, La Paz: Mundy Color.

frase emblemática dirigida al capital extranjero: “necesitamos socios y no patrones”. De otro, la ejecución de una revolución nacional-popular que tenta implantar un “capitalismo andino-amazónico” con decisiva participación del Estado en el desarrollo capitalista, conforme sostuvo Alvaro García (vice presidente boliviano)¹³.

En suma, el Estado boliviano redefinió su política externa con base en la participación multilateral, alineada con la política externa practicada por el gobierno de Chávez (Venezuela) y en parte por el gobierno cubano: soberanía, solidaridad e integración entre los pueblos latinoamericanos, estampada en el Tratado de Comercio entre los Pueblos (TCP) y encuadrada en la corriente política “bolivariana”. Tratase de una especie reciclada de postura latinoamericanista y tercermundista que surgió con los Países No Alineados en la década del 50 en alternativa a las relaciones dominantes en el ámbito de la “Guerra Fría”. Y aún, el gobierno de Morales imprimió un carácter indigenista y multicultural al funcionamiento del aparato diplomático ajustandoló al proceso de cambio sócio-económico y político que atraviesa el país en el ámbito interno. Cambio importante en relación a los gobiernos neoliberales, cuyo cuerpo diplomático siempre estuvo controlado por las élites y sectores medios de origen blanco. El ministro de las relaciones exteriores es aymara (David Choquehuanca) y existen varios ministros indígenas, campesinos y trabajadores que componen el gabinete del gobierno de Morales¹⁴. En su discurso del día 6 de agosto de 2007, Morales enfatizó que Bolivia había recuperado la dignidad y los recursos naturales y recordó también que antes de su gobierno las leyes eran redactadas en inglés y los legisladores no hacían otra cosa sino traducirlas. Pero “ahora existen ministros indígenas, legisladores indígenas [...]”¹⁵.

A seguir, presentaremos algunos elementos de la política externa en el contexto de los acuerdos y tratados comerciales realizados por Bolivia bajo el gobierno de Morales que nos parecen más problemáticos debido a su carácter conflictivo e incierto.

2. Las relaciones con los Estados Unidos: ALCA y APTDEA

Desde el inicio del gobierno en cuestión las relaciones entre los Estados Unidos y Bolivia estuvieron marcadas por conflicto, confrontación, indiferencia y desconfianza mutua. Eso se debió sobre todo a dos hechos importantes resultantes de la reorientación de la política externa boliviana: de un lado, al abandono del gobierno boliviano de la política externa tradicional practicada por los gobiernos neoliberales, cuyas características eran la casi completa submisión o subserviencia y el alineamiento automático a los Estados Unidos; y de otro, al alineamiento casi automático con Venezuela y Cuba. El gobierno de Bush practicó una política vacilante y contradictoria

¹³ García, Alvaro (2006). “El ‘capitalismo andino-amazónico’”, *Le Monde Diplomatique*, Edición Chilena, Enero, en <http://www.lemonediplomatique.cl/El-capitalismo-andino-amazonico.html>.

¹⁴ Con todo, la composición de gabinetes ministeriales policlasista a lo largo de la historia del país no es novedad, principalmente después de la revolución nacional de 1952, período en que la COB (Central Obrera Boliviana) exigía la participación de trabajadores mineros o de otras categorías de trabajadores como ministros en los gobiernos del MNR (co-gobierno MNR-COB, 1953-1955), de los gobiernos de los períodos 1979-80 y el co-gobierno UDP-COB, 1982-85. La novedad del gobierno de Morales está en la participación de indígenas como ministros. Entre tanto, hubo un caso (tal vez el único hasta el momento, salvo engaño nuestro) en que un indígena se tornó vice presidente del país en un gobierno neoliberal (el de Sanchez de Lozada, 1993-1997): el aymara Víctor Hugo Cárdenas, del partido Movimiento Revolucionario Tupac Katari Liberación (MRTKL) – partido indigenista conservador con ideología nacionalista/movimientista de tipo del MNR, facción Paz Estenssoro.

¹⁵ Rojas, Rosa (2007). “Declaraciones de Evo Morales en el aniversario de la independencia nacional. ‘Contra las políticas del imperialismo no hay marcha atrás’”, en <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=54679>.

revelando una descomunal falta de preparación e indiferencia en relación al gobierno de Morales. El ejemplo de eso fue la práctica de la política agresiva, hostil y de desqualificación del líder cocalero en la campaña presidencial de 2005 por parte del embajador estadounidense en aquel momento, que utilizó elementos de la arcaica política de la “Guerra Fría”. Lo que contribuyó, entre otros factores, con la amplia victoria electoral de Morales y con el aumento del sentimiento antiimperialista de las masas populares e indígenas bolivianas. Por su parte, el gobierno boliviano se mostró también hostil, agresivo y crítico en relación a su homólogo estadounidense y pasó a exigir el respeto a la soberanía boliviana y el encuadramiento en las relaciones de reciprocidad entre los dos países.

En ese sentido, la artillería del discurso antiimperialista del gobierno boliviano se concentró contra la ALCA, apoyando abiertamente un tratado de comercio alternativo con Cuba, Venezuela y Bolivia: el TCP bajo la lógica de la diplomacia “Alianza Bolivariana para las Américas”. Con la subida de Correa a la presidencia, Ecuador pasó a integrar el eje “bolivariano”. En respuesta, el gobierno estadounidense tentó neutralizar la influencia política de Castro y Chávez en el ámbito sudamericano a través de un emprendimiento ideológico poco fructífero. Con todo, los Estados Unidos se caracterizan por practicar relaciones predominantemente de país a país, a pesar de utilizar métodos polivalentes. Desde 2007 el gobierno de Bush parece haber modificado el sentido de las relaciones con los países latinoamericanos sin referirse a la ALCA: la nueva política energética basada en combustibles renovables y no tradicionales, tentando así atraer nuevamente esos países a su esfera de influencia política e ideológica y neutralizar la influencia regional de Castro, Chávez y Morales. Por otro lado, los Estados Unidos parecen estar también incentivando la figura de Lula para neutralizar Chávez, al mismo tiempo en que aumenta su apoyo al gobierno conservador colombiano (Uribe) para rechazar a las FARC y desestabilizar el gobierno venezolano.

Existen varios informes elaborados por la burocracia estatal estadounidense y por intelectuales (academia) preocupados con la recuperación de la hegemonía de los Estados Unidos en Venezuela y Bolivia. Uno de esos informes, que sugiere al gobierno estadounidense que ejecute una estrategia de acción política realista urgente, fue elaborado por el boliviano Gamarra en 2007, cuyo título es *Bolivia on The Brink*¹⁶. El informe analiza la actual situación del país bajo el gobierno de Morales y sostiene que, después de detener la influencia un tanto incontestada en el período neoliberal (20 años), los Estados Unidos estarían perdiendo terreno en los ámbitos político y económico encuanto actor tradicional potencial en la región. La recuperación de la hegemonía política regional sería de vital importancia para este actor en el sentido de tentar redefinir las relaciones entre los dos países, pues si no se toman medidas inteligentes de cuño polivalente y de gran alcance, Bolivia podría seguir el camino de Venezuela, amenazando seriamente la estabilidad en la región andina y en el Cono Sur. Para tanto, incumbiría a los Estados Unidos –y esta sería la principal sugerencia del informe– fortalecer los lazos de relaciones diplomáticas y comerciales con sus principales aliados (Argentina, Brasil y Chile) con el objetivo de que estos se envuelvan e intervengan más, directa e indirectamente, en los asuntos bolivianos para neutralizar y contener el avance radical del nacionalismo y “populismo” del gobierno de Morales.

En nuestro análisis, la propuesta de ese informe estaría siendo aplicada por la *política pragmática* de los países mencionados y que no estaba descartada, siendo una de las formas de intervención posibles, pues sabese que predomina ese padrón de

¹⁶ Gamarra, Eduardo (2007). “Bolivia on The Brink”, *The Center For Preventive Action*, CSR n° 24, February 2007, 63 pp., *Council on Foreign Relations*, en <http://www.cfr.org/bolivia/bolivia-brink/p12642>.

política (*real politik*) en las relaciones entre los Estados-Naciones en la esfera internacional. Por otro lado, a pesar de existir una permanente preocupación de la burguesía imperialista, de las burguesías nacionales y de las burocracias estatales en relación al movimiento de las masas populares y a la emergencia de la revolución social (principales temores reales), existe una exagerada preocupación sobre la peligrosidad del gobierno de Morales en ese informe, inclusive no contempla la ejecución, por parte de ese gobierno, de la política del pacto o consenso conflictivo con las fuerzas de la oposición autonomista de la región de Santa Cruz¹⁷.

En nuestro análisis, una posible radicalización a corto y medio plazos estaría descartada, a no ser que ocurra otra crisis nacional profunda y las masas populares vuelvan a las calles como en 2005. La política de concertación (pacto) entre gobierno y oposición entró en su tercera fase de implementación con la elaboración de la *Ley Transitoria Electoral* por parte del gobierno del MAS, cuya discusión y debate comenzó en inicios de abril de 2009 (específicamente el 5/04/2009), y que fue aprobada para ser aplicada en la elección nacional de diciembre de 2009 –una nueva fase política llena de conflictos, tensiones y confrontos en la arena electoral. Las otras dos fases fueron: 1) otorga de poder de veto por parte del MAS-gobierno de Morales a la oposición autonomista a lo largo del período 2006-2007 en la Asamblea Constituyente –la nacionalización (blanca) del gas y el petróleo, la Reforma Agraria y el proceso de elaboración conflictiva de la nueva carta constitucional demostraran la realización de reformas pactadas entre el gobierno y la oposición; 2) Aprobación de la nueva Carta Magna en el primer semestre de 2008, que contempló la modificación de más de cien artículos que favorecieron a la oposición autonomista (gran propiedad fundiaria) y al gran capital monopolista extranjero.

En ese sentido, la inestabilidad política de Bolivia o una supuesta situación revolucionaria, a nuestro ver, tiende a ser utilizada (los Estados Unidos siempre utilizaran ese argumento) por los países más fuertes como pretexto para posibles intervenciones de cuño político y militar en el país, caso el régimen del MAS monte los trillos del “autoritarismo militar” o “Estado fuerte” (conforme sustenta la oposición), siguiendo el ejemplo de Chávez. Percíbese así la intensa campaña política de la OEA (*Carta Democrática*), directa e indirecta, de desconfianza en relación al gobierno de Morales y que asume un discurso democratizante de vigilancia relativo a la defensa de las instituciones democráticas y del “Estado de derecho”: respeto a los derechos humanos, protección de las *minorías políticas*, del equilibrio y separación de poderes, de la libertad de imprenta, expresión o información, en una palabra, la defensa del derecho de las grandes propiedades fundiaria, del capital nacional y del capital monopolista extranjero¹⁸.

Cuanto al MERCOSUR y la UNASUR, estos se debaten entre el apoyo abierto al gobierno de Morales y la defensa del Estado de derecho, predominando más el apoyo abierto (caso de la última) con el fin de defender el proceso democrático que atraviesa el país. Tienden a inducir al diálogo en la resolución de los conflictos entre gobierno y oposición (defensa de la *Cláusula Democrática* del MERCOSUR), conforme mostró la reunión de los jefes de Estado sudamericanos en Chile, convocada por la UNASUR en septiembre de 2008, que abogó a favor del gobierno boliviano por ocasión de la tentativa de golpe de la oposición contra éste. Es de esperarse que, en un contexto de ascensión de la democracia participativa (la cual disminuyó en 2006 por obra del propio

¹⁷ Ver Duran Gil, Aldo (2008a), op. cit, pp. 57-59.

¹⁸ Ver Informe de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos de la OEA: “La OEA se aflige por la violencia que vive el país” (*La Razón*, 8/08/07). A pesar de que el actual secretario general de la OEA, Insulza, haberse posicionado a favor del gobierno de Morales, con gran desagrado de la oposición.

gobierno-MAS mediante el bloqueo político y burocrático de los movimientos populares), tanto la OEA como el gobierno estadounidense tienden a presionar para reinstaurar una democracia representativa limitada y, en lo extremo, una democracia de cuño neoliberal en Bolivia. En el caso del MERCOSUR y la UNASUR, tal presión no es evidente, siendo más perceptible el apoyo al proceso democrático, lo que ocultaría una preocupación latente sobre la radicalización de ese proceso (democracia participativa) que afectaría a los países vecinos. Por eso, no está descartada, por parte de esos actores (OEA, Estados Unidos, Brasil, Chile), la defensa de una democracia representativa limitada con dosis de autoritarismo civil como ocurre en la mayoría de las democracias actuales -o en lo máximo, adaptar el modelo de ese tipo de democracia tal como funciona en Brasil, Argentina o Chile¹⁹.

Uno de los dilemas actuales del gobierno estadounidense, del capital financiero internacional y de las clases dominantes nativas sería la defensa viable de un tipo de democracia limitada (o de una de sus variantes: el autoritarismo civil de base presidencialista) en vez de la restauración pura y simple de dictaduras militares. La restauración de éstas sería políticamente arriesgada debido al compromiso histórico de sectores de la oficialidad militar con el capitalismo de Estado, bien como a la ausencia de unidad, en el interior de la institución castrense, en relación al proyecto neoliberal de “modernización” capitalista²⁰. Por eso, los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde ocurre una fuerte contestación de la hegemonía neoliberal por parte de un poderoso movimiento popular, seguida de reorganización institucional por obra de un tipo de democracia participativa, son vistos con extrema desconfianza y peligro por la potencia hemisférica y por los actores regionales más influyentes (sobre todo Brasil y Chile).

La ALCA y la APTDEA deben ser analizadas tomando en cuenta esas observaciones. Los países latinoamericanos en general, y los andinos en particular, son presionados a someterse a los imperativos políticos de la potencia hemisférica para viabilizar los acuerdos comerciales, cuya dinámica de negociación sigue una lógica individual: de país a país, bilateral, y no colectivamente (como ocurre con los casos de Perú, Colombia, Chile). La lucha de los países del bloque “bolivariano” (Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua) no sólo se opone al ALCA y al APTDEA, colocando en su lugar el TCP en el ámbito de la Alianza Bolivariana para las Américas, como también combate el proyecto de los biocombustibles, una especie de “caballo de Troya” del gobierno de Bush para rescatar y imponer la ALCA en América Latina. Después de la visita de Bush al Brasil en Marzo de 2007, Lula -a pesar de la postura autónoma de la política brasileña en relación a los Estados Unidos, más volcada para América Latina- parece haberse convertido en el “muchacho propaganda” de la política de Bush sobre los biocombustibles en la región, tentando neutralizar la influencia del liderazgo de Castro, Chávez y Morales, que se oponen a tal proyecto. No por acaso los defensores de ese nuevo tipo de producto energético para exportación provienen, en Bolivia, de los sectores más arcaicos y conservadores: el gran latifundio y segmentos empresariales del poderoso sector agro-exportador (principalmente soya), influenciados por el discurso de Lula sobre el asunto²¹ -en el Brasil el asunto del biocombustible se

¹⁹ Sobre el caso del Brasil, ver Duran Gil, Aldo (2010). “Reflexões sobre as eleições presidenciais no Brasil em 2010”, *Em Debate*, Belo Horizonte, Vol. 2, nº 12, en www.opiniaopublica.ufmg.br/emdebate/004_%20artigo%20opiniao%20aldo%20duran%20EBH.pdf. Una observación en relación a una palabra de este texto que está incorrecta: en vez de “beligerante” entender “legiferante”.

²⁰ Ver Saes, Décio (2001), op. cit., ver capítulo “Democracia e capitalismo no Brasil: balanço e perspectivas”.

²¹ Cf. “Los biocombustibles podrían generar 2 millones de empleos”, *El Diálogo*, 6/8/07.

transformó en una política de Estado con voluminosa inversión estatal para atraer el capital extranjero. Los mismos sectores defienden acuerdos unilaterales con los Estados Unidos en los ámbitos de la APTDEA y CAN.

Después de Septiembre de 2008 las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se empeoraron y se tornaron más asperas, con retaliaciones mutuas y al borde del rompimiento completo (expulsión de embajadores y de funcionarios). Podemos inferir que las acciones súbitas, con torpeza inusitada, se debieron más al grado de amorismo y el desespero por parte de la política externa del gobierno de Bush ejecutada en Bolivia. En abril de 2009 tales relaciones atravesaron una ligera distensión, no siendo eliminado el alto grado de conflicto y retaliaciones. Con la subida de Obama al poder gubernamental probablemente la situación camine para un cuadro de mayor distensión y cooperación en un contexto de reorientación de la política externa estadounidense frente a Bolivia, Venezuela y Ecuador. Con todo, cualquier previsión política, a corto y medio plazos, sobre la normalización de las relaciones entre ambos países se torna difícil, una vez que la administración de los demócratas no parece demostrar, en relación al gobierno de Bush, un cambio substantivo o radical de la política externa estadounidense, tanto para Bolivia y los países andinos quanto para América Latina.

3. Las relaciones con el MERCOSUR y el Brasil

En el ámbito de las relaciones con el MERCOSUR, Bolivia aún no es un miembro pleno de este bloque económico, a pesar de existir un discurso de integración, cooperación y solidaridad en el interior de esa institución regional. Lo que demuestra acentuada asimetría y desigualdad en tales relaciones, bien como la extrema dependencia y vulnerabilidad del Estado y economía bolivianos. El gobierno de Morales solicitó su ingreso para ganar tal *status*, pero permanece aún esperando respuesta definitiva. La tardanza para concretizar ese objetivo demuestra que depende de la voluntad política del Brasil y Argentina, que no parecen estar interesados, en corto plazo, en tener a Bolivia como miembro permanente. Los argumentos y explicaciones sobre el asunto son variados, con el predominio de los temas pobreza e inestabilidad política permanente en Bolivia, pero que justifican ideológicamente, de forma indirecta, la mantención de la dependencia y atraso de este país. El ejemplo sobre el tema pobreza (que aparece la mayoría de las veces con cuño moral) se patentó en el discurso de Lula (endosado por el Itamaraty) a lo largo de 2006 y 2007 por ocasión de los episodios sobre la nacionalización del gas, el aumento de su precio y la recompra de las refinerías por parte del gobierno boliviano que eran de la Petrobras: el Brasil estaría siendo solidario con el país más pobre de América del Sur por el hecho de comprar su principal producto de exportación, sin el cual Bolivia no podría sobrevivir económicamente.

Con todo, el argumento más difundido es de carácter técnico (una versión camuflada de argumento político), vehiculado por la diplomacia brasileña y aceptado consensualmente por los demás miembros, principalmente por Argentina: Bolivia no puede ser miembro pleno del MERCOSUR porque participa de otro bloque regional (la CAN) y al mismo tiempo se recusa a participar de la Tarifa Externa Común del MERCOSUR; y porque también exige tratamiento especial o favorable en los dos bloques; caso el bloque en cuestión lo acepte en estas condiciones, traería serias complicaciones y sobre todo mayor asimetría con los miembros menores del bloque, de ahí la imposibilidad de su ingreso como miembro pleno²².

²² Ver Entrevista de Celso Amorim (ministro de las Relaciones Exteriores) al programa *Diplomacia* de la TV Senado brasileña en 13 de Febrero de 2009: “Ministro Celso Amorim habla a la TV Senado sobre

En ese sentido, para los países dominantes del bloque, principalmente Brasil, sería funcional mantener Bolivia como miembro asociado en la medida en que contribuye con la reproducción de su debilidad y dependencia económica y política. Decimos *funcional* debido al hecho de que la preponderancia económica, sobre todo brasileña, permitiría la extracción y expoliación permanente de los recursos energéticos (gas, productos mineros etc.), necesarios y codiciados por el capital monopolista internacional y por las burguesías nacionales de la región -recordemos que el millonario brasileño Eike Batista no consiguió permisión del gobierno de Morales para operar con una fábrica siderúrgica (a EBX) en la región de *El Mutún*, próximo de la frontera con Brasil²³. Con efecto, la preocupación fundamental que está por detrás de la mantención de Bolivia como miembro asociado del Mercosur sería la inestabilidad política y económica del país y, sobre todo, el temor del capital extranjero frente a las nacionalizaciones²⁴. Así, el tratamiento del Brasil en relación a Bolivia no se desviaría de esa lógica y se expresaría en los acuerdos comerciales y en las relaciones económicas generales determinadas por sus intereses nacionales. Evidentemente, es de interés de los sectores económicos y de la burocracia estatal en Bolivia buscar mercado para sus productos de exportación, estando obligados a practicar relaciones diplomáticas y comerciales posibles, de acuerdo con las condiciones reales del país conforme su peso específico detenido en la jerarquía de países capitalistas en el ámbito regional. Los últimos episodios de las relaciones entre Bolivia y Brasil (compra de refinerías de petróleo de la Petrobras; construcción de termoeléctricas en la frontera con Bolivia, en el río Madera-Mamoré, que provocaría un gran impacto ambiental del lado boliviano; redefinición del precio del gas y del volume a ser comprado por Brasil), con grado variable de tensión y conflicto, expresan una profunda asimetría y desigualdad entre los dos actores.

Con todo, el nuevo liderazgo que comanda el aparato estatal boliviano se empeña en rescatar buena parte de la soberanía nacional, buscando establecer relaciones multilaterales y de reciprocidad en las relaciones con los demás países en la mayoría de los niveles, o entonces atenuando levemente las profundas asimetrías y desigualdades.

4. Las relaciones con Chile y el tema del litoral

Las relaciones con Chile se caracterizan por ser una de las más tensas y conflictivas debido a la cuestión del litoral perdido por Bolivia en la llamada “Guerra del Pacífico” en 1879. El gobierno neoliberal de Sanchez de Lozada (2003) instrumentalizó el tema del litoral a través de la propaganda de la obtención de una faja de territorio con acceso al mar para justificar la venta de gas a Chile y al mercado estadounidense. Después de las jornadas de lucha por el gas (2003-2005), en que las masas populares derrumbaron los gobiernos de Lozada y de Rodrigues, el gobierno de

estrategia diplomática brasileña”, en <http://www.senado.gov.br/Agencia/verNoticia.aspx?codNoticia=88041&codAplicativo=2>.

²³ Ver “Eike desiste de usina na Bolívia e deve perder US\$ 20 mi”, *Folha de São Paulo*, 24/04/2006, en <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u107162.shtml>.

²⁴ Amorim también sostuvo que “Bolivia es un país muy pobre, y Brasil no tiene interés en sacar ventaja. Lo que nos interesa es la estabilidad de Bolivia”, ver “Adesión de Bolivia agudiza divergencias en el Mercosur”, *Folha de São Paulo*, 17/01/2007. Son varias las instituciones o representantes del gran capital monopolista internacional que refuerzan los argumentos sobre el temor de las nacionalizaciones en Bolivia. Ver el artículo de la *International Center for Trade and Sustainable Development*: “Adesión de Bolivia al Mercosur: oportunidades y desafíos”, en <http://ictsd.net/i/news/12478/>. Una análisis alternativa sobre el asunto ofrece Duran Gil, Aldo (2003), op. cit., ver ítem 5.2 “Carácter do processo de desnacionalização da economia boliviana e instabilidade política”.

Morales atendió la reivindicación de no vender gas a Chile ni exportar el producto por sus puertos, justamente debido al conflicto con ese país en relación al litoral perdido. Inclusive, el gobierno de Morales nacionalizó el gas –pero no transformó la estructura económica del país, manteniéndose como una economía de enclave minero, conforme nuestro análisis- dando secuencia al plebiscito de 2004, que reafirmó la propiedad estatal de las minas de hidrocarburos y rechazó el tema de “gas por mar” con Chile.

Después de 2006 las relaciones diplomáticas entre los gobiernos boliviano y chileno atravesaron un momento de distensión y de “buena vecinanza” con la retomada del diálogo “sin exclusiones” en diversos niveles con el gobierno de Bachelet, que incluye la demanda marítima boliviana: tratase de la agenda de 13 puntos²⁵. Chile parece estar señalando la tentativa de instaurar un acuerdo comercial de compra de gas, pues en ese momento vivía (e vive) una de las mayores crisis energéticas debido a la insuficiencia de fornecimiento de gas por parte de Argentina, que por su vez ésta compra de Bolivia con precio subvencionado (a precio de banana, como ocurre con la venta del producto al Brasil) y lo reexporta más caro a Chile. Entre tanto, la compra de gas no aparece en las negociaciones comerciales por ser polémico y controversial en Bolivia, ya que cualquier tentativa de acuerdo comercial con base en ese producto está necesariamente articulado al problema del litoral. Del lado del gobierno boliviano, el tema de “gas por mar”, contrariamente al plebiscito de 2004, que rechazó ese tipo de acuerdo con Chile, parece estar seduciendo a la diplomacia boliviana y ganando consenso en el gobierno de Morales. Conforme Soliz²⁶, existiría una gran presión del capital monopolista extranjero que opera en Chile sobre la burocracia estatal comandada por Morales para que Bolivia realice un acuerdo comercial de venta de gas.

Por otro lado, los gobiernos bolivianos, independientemente del partido político y de su orientación ideológica, manipulan constantemente el tema sobre el litoral, a través de un discurso nacionalista, para aumentar su legitimidad frente a las masas populares y a las clases medias (caso de los gobiernos militares) o garantizar votos (caso del comportamiento de los gobiernos democráticos y la oposición). Generalmente esa estrategia es ejecutada en los momentos de conmemoración de las fiestas patrias (Marzo y Agosto). El gobierno de Morales no fue excepción: destacó como uno de los grandes logros de su política externa la inminente salida al mar a través de la negociación con Chile. Entre tanto, la solución del problema marítimo por parte de Chile no parece ser promisor, ya que su política estatal en relación al tema no cambió una coma o partícula en más de un siglo. Inclusive, cualquier solución pasaría por la consulta al Perú, que aún reivindica el puerto de Arica y parte de territorio marítimo limítrofe con Chile como perteneciente a ese país.

Tratase de un problema trinacional de alta tensión y conflictividad justamente porque amenaza la estabilidad geopolítica y militar subregional, bajo el control de Chile. Con todo, puede ser que se avise una solución a corto y medio plazos, empero ella no

²⁵ Fue firmada a mediados de 2006. Incluye el tema marítimo y otros asuntos comerciales y culturales bilaterales, como ser: el desarrollo de la confianza mutua, la integración fronteriza, el libre tránsito de ciudadanos entre ambos países, el Silala, la integración física, la complementación económica, lucha contra la pobreza, seguridad y defensa, cooperación para el control del tráfico de drogas y precursores, educación, ciencia y tecnología.

²⁶ Soliz, Andrés (2007). “Entre Petroleras y ONG”, en www.rebellion.org. Soliz fue ex ministro del petróleo del gobierno de Morales, que pasó a la oposición, y defendió una nacionalización radical. Acusó al gobierno de ser conivente con las transnacionales del petróleo y de entregar los recursos energéticos a cambio de impuestos miserables. Ellas habrían financiado los referendos sobre el gas e inclusive, la reforma constitucional. Denuncia también que la mayoría de los integrantes del gobierno estaría a servicio de ONGs financiadas por el capital extranjero y que defienden los intereses de algunas empresas transnacionales en Bolivia.

debe alterar significativamente el control geopolítico y militar detenido por Chile, cualquiera que sea la solución. Una de las salidas relativamente fácil al problema viene defendiendo la diplomacia boliviana: concesión por parte de Chile de una faja minúscula de territorio para que Bolivia consiga tener acceso a un puerto en el litoral. En compensación, Chile exigiría un territorio boliviano equivalente en la frontera entre los dos países, principalmente en una región rica en recursos hídricos, tan escasos del lado chileno. Sin embargo, fuentes militares bolivianas informaron que Chile sólo concedería una faja minúscula y en un lugar inapropiado para construcción de un puerto²⁷. La apuesta en el cambio del corredor oceánico por el fornecimento de recursos energéticos baratos (“gas por mar”) -que estaría ganando consenso en círculos del gobierno de Morales, principalmente en el sector que dirige el aparato diplomático- podría ser muy arriesgado para Chile, conforme argumenta la burocracia chilena, justamente por el hecho de que cualquier acuerdo comercial o industrial con base en ese cambio no tendría ninguna garantía, porque sería inviabilizado por la permanente inestabilidad política del país. Así, el peligro de las nacionalizaciones reaparece como consecuencia de la inestabilidad política.

En Enero de 2008 el gobierno peruano recorrió a la Corte Internacional de Justicia en La Haya para obligar que Chile negocie el litigio sobre territorios marítimos limítrofes reivindicados por Perú, justamente en la región donde Bolivia exige una faja de territorio en el litoral chileno. Según intelectuales y ex diplomáticos bolivianos, la acción peruana contra Chile cayó como un balde de agua fría para el gobierno de Morales²⁸. En Marzo de 2009, por ocasión de las actividades patrióticas que recuerdan la pérdida del litoral boliviano en la “Guerra del Pacífico”, frente al litigio peruano se desató una controversia entre los presidentes Alan García y Evo Morales y sus respectivos representantes del cuerpo diplomático sobre la reivindicación boliviana de salida al mar. Los representantes del gobierno boliviano acusaron al Perú de paralizar y, sobre todo, bloquear la reivindicación de Bolivia frente a Chile. Por su vez, el gobierno peruano respondió que su demanda es histórica y justa, siendo un asunto bilateral con Chile y que no tiene relación con Bolivia; ya el caso de la mediterraneidad de este país sería un asunto bilateral con Chile. Percíbese entonces que cada país defiende sus intereses nacionales y, para concretizarlos –como en el caso que nos ocupa- puede boicotear y hasta contrariar o negar los intereses de sus vecinos. A pesar del discurso integracionista, este conflicto tiende a agravarse en coyunturas de crecimiento de posturas nacionalistas y a recrudeserse en posturas belicistas²⁹. Dada la posición de

²⁷ Esa modalidad de cambio (el llamado cambalache) fue dominante en el discurso de las dictaduras chilena y boliviana en los 70, pero nunca fue concretizado. En aquella ocasión, el tema marítimo fue ampliamente manipulado por la dictadura banzerista a través de la consigna “volver al mar” (cuando en realidad fue un gran fiasco) y sirvió para recuperar cierta legitimidad, ampliamente perdida, frente a las camadas medias y sectores populares alineados con el régimen, en un contexto de aumento de la represión de las clases trabajadoras y del movimiento popular. Por otro lado, la negociación entre Banzer y Pinochet sobre el “cambalache”, que culminó con el “abrazo de Charaña”, sirvió también para mejorar la imagen externa negativa de la dictadura de Pinochet debido a la carnificina de las masas trabajadoras chilenas. Ver Duran Gil, Aldo (2003), op. cit., p. 323 y sigs.

²⁸ Ver “Un fallo que favorezca a Perú pesaría en el diálogo marítimo”, *La Razón*, 2/2/08.

²⁹ Ver “Alan García: Bolivia perdió hace rato la esperanza de una salida al mar”, *El Deber*, 25/03/09. El discuso belicista apareció en algunos intelectuales peruanos que, para justificar la reivindicación de su país, parten del supuesto según el cuál Chile sería un país belicista y que el Perú debería estar preparado para defender la soberanía nacional. Es el caso del constitucionalista Javier Valle-Riestra, ver “Perú comunicó a Bolivia inicio del litigio marítimo con Chile”, *El Diario*, 25/03/09. Por su parte, varios políticos e intelectuales bolivianos de la oposición criticaron la política externa del gobierno de Morales sobre la salida al mar, siendo considerada como fracaso o anti-patriótica en la medida en que legitimaría la pérdida del territorio marítimo a favor de Chile, postura ésta que estaría patentada en la nueva carta

acentuada dependencia de Bolivia en la estructura de poder de los países sudamericanos (principalmente del Cono Sur) y frente a la debilidad crónica tanto del Estado boliviano cuanto de su aparato diplomático, tornase imposible, a corto y medio plazos, que el país defina el conflicto por la vía de la cartada diplomática (a pesar de que esta posibilidad es menos remota) o por la vía de la acción bélica. Lo que mantiene indefinida e incierta la solución de la revindicación secular boliviana.

Actualmente (diciembre de 2011) las negociaciones sobre la cesión de un corredor marítimo o un puerto boliviano vuelven a estaca cero: a la situación anterior de la instauración del régimen democrático o a la situación que vigoró después de la revolución de 1952. Lo que significa que no hay negociación sobre el tema del litoral boliviano por parte de Chile, que mantiene vetada tal solución o negociación, mismo con cambio del régimen político (militar o democrático) o cambio de gobierno bajo el régimen democrático (Bachelet o Piñera). O entonces, mismo que el problema tenga desaguado en el aumento, por parte de Chile, de la carga tributaria tanto del uso de los puertos chilenos por la importación y exportación de mercaderías por parte de Bolivia, como del precio del transporte de las mismas, no siendo tolerado por el gobierno de Morales por considerar que se trata de un aumento abusivo, implicando en una carga económica pesada para el país –que fue agravado por la privatización de los puertos chilenos, principalmente el de Arica, y de la posible privatización del ferrocarril Arica-La Paz, incidiendo en el aumento de las tarifas portuarias y el transporte, vulnerando el derecho del país al libre tránsito por puertos chilenos. A propósito, ese fue el problema que originó la acción penal internacional en La Haya interpuesta por el gobierno boliviano contra Chile³⁰.

Delante del hermetismo chileno, el gobierno de Morales oscila entre, de un lado, la denuncia en los foros internacionales (ONU, OEA, UNASUL, el naciente CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) sobre la injusticia de no tener acceso al litoral y la insensibilidad de negociación por parte de Chile³¹; y de otro, la amenaza de acción retaliadora de intensidad leve o media contra ese país, buscando obligarlo a la negociación efectiva sobre el asunto, como fue el caso de la acción penal a ser interpuesta en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Resta saber si ésta última acción será concretizada por el gobierno de Morales y, una vez concretizada, si conseguirá sus objetivos propuestos en corto y medio plazos –o sea, el éxito o fracaso de la acción penal- en un escenario de respuesta por parte de Chile y delante de las consecuencias posibles de esa acción por parte de los actores envueltos. En otras palabras, podemos arriesgar los siguientes escenarios posibles a corto o medio plazos:

constitucional. Ver “Tito Hoz de Vila reafirma opción de llevar a Chile a La Haya por salida al mar”, *El Deber*, 25/03/09; “Bolivia más lejos del mar a 130 años de la Guerra del Pacífico”, *Bolpress*, 24/03/09. Por su parte, el gobierno de Morales responde que nunca se avanzó tanto sobre el tema como en ningún otro gobierno, inclusive la revindicación secular del litoral sería un imperativo constitucional que aparece en la nueva Carta Magna. Por eso acusa a la oposición de manipular el asunto a su favor en un año de contienda electoral bastante disputada. Ver “Choquehunaca dice que Perú no informó sobre su demanda”, *El Diario*, 26/03/09.

³⁰ Ver “Bolivia advierte a Chile con arbitraje si no revierte privatizaciones en Arica”, *La Tercera*, 21/11/2011; “Bolivia advierte a Chile con juicio ante tribunal arbitral”, *La Razón*, 22/11/2011, en <http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=141611&EditionId=2723>. Días después (25 de noviembre) el Ministro de Defensa boliviano, Rubén Saavedra Soto, informó en Madrid la “firme decisión” del gobierno de Bolivia de llevar a instancias jurídicas internacionales el “histórico” litigio que el país mantiene con Chile por la salida al mar, pero no excluyó “la posibilidad de seguir con el diálogo”, ver “Gobierno: litigio marítimo entre Bolivia y Chile llegará a La Haya”, *El Deber*, en <http://www.eldeber.com.bo/2011/2011-11-25/vernotaahora.php?id=111125112936>.

³¹ Ver “Evo pide a la Celac para que a Bolivia le devuelvan el mar”, *El Deber*, 3/12/2011, en <http://www.eldeber.com.bo/2011/2011-12-03/vernotaahora.php?id=111203140447>.

acciones contrarretaliadoras por parte de Chile contra Bolivia (que no se descarta, pero con efectos altamente conflictivo), aceptar una negociación forzada o impuesta a Chile por ese país, o entonces negociación pura y simple para congelar o postergar mismo (*ad infinitum*) la solución del problema crucial por parte de Chile, desviándolo para asuntos secundarios, conforme está ocurriendo actualmente en las reuniones bilaterales para solucionar problemas fronterizos, portuarios, tarifarios o económicos-comerciales entre los dos países³².

Conclusión

Nuestra análisis de la política extena del gobierno de Evo Morales y de sus aspectos importantes buscó demostrar que hubo una reorientación de la misma a partir de 2006, momento de la subida al poder gubernamental del partido Movimiento al Socialismo (MAS). El examen de sus trazos esenciales mostró el carácter multilateralista, de reciprocidad, negociación compartida y de independencia basado en la defensa de la soberanía nacional, alineada a la corriente política “bolivariana”. Expresó, aún, la lógica del pacto político (política interna) consensuado conflictivamente entre el gobierno y la oposición autonomista. De ahí su avance y limitaciones en un contexto de cambio por el cuál atraviesa el país. Esa modificación de la naturaleza de la política externa en relación a los gobiernos neoliberales anteriores no fue suficiente para eliminar las acentuadas asimetrías, desigualdades y dependencia en dos niveles: de un lado, frente a los sectores económicos con mayor poder e influencia política (gran latifundio y sector agro-exportador, gran capital monopolista extranjero); de otro, frente a los Estados Unidos y a los países vecinos más influyentes, como Brasil, Argentina y Chile. Ya las relaciones entre Bolivia y los Estados Unidos se caracterizaron por la conflictividad, confrontación, indiferencia y desconfianza mutua, llegando a se tornar asperas hasta el punto del rompimiento provocado por un inusitado amadorismo y un grado de torpeza sin precedentes por parte del segundo actor.

³² Ver “Bolivia y Chile inician reuniones para zanjar conflictos fronterizos”, *El Deber*, 6/12/2011, en <http://www.eldeber.com.bo/2011/2011-12-06/vernotaahora.php?id=111205223944>.